

Una revisión rápida de la información presentada en el cuadro es suficiente para entender rápidamente el rango muy variado de datos emitidos. Dos comentarios importantes se derivan de esta información.

Primero, las diferencias importantes que existen entre los estimados que se dan durante los primeros días que siguen al terremoto y entre éstos y los emitidos meses después requieren cuestionamiento serio de la pertinencia o la conveniencia de emitir datos de evaluación rápida, y también, en cuanto a las metodologías y los conceptos empleados. Y, en segundo lugar, se presenta una clara necesidad de establecer un acercamiento oficial y centralizado a la difusión de información, evitando el acercamiento de libre juego adoptado.

Con referencia al primer punto, es difícil entender, por ejemplo, cómo cálculos tan distintos pueden haberse emitido en cuanto a los daños en la Refinería de RECOPE, donde Hernán Bravo, el día 24 de abril se refería a doscientos millones de colones, mientras que el dato registrado en el documento de Vanesa Robles, fechado el 8 de agosto, se refería a ocho mil millones de colones. Por otra parte, también es difícil entender la diferencia en los cálculos de daños a acueductos rurales atribuidos a Thelmo Vargas el día 26 de abril, donde se refiere a quinientos millones de colones y, por otra parte, los 2.7 mil millones de colones registrados en el documento de Robles. Y esto para mencionar solamente dos de los casos más notorios.

En términos de la necesidad de establecer canales centralizados y oficiales para la difusión de información, también es difícil entender, por ejemplo, cómo es que Thelmo Vargas podría producir un dato de siete mil millones de colones para los costos totales de reparaciones a la infraestructura, el día 26 de abril; Bernardo Méndez Antillón, un dato de trece mil millones de colones el día 22 de mayo; y, un día más tarde Guillermo Madriz es citado hablando de siete mil millones de colones y Rodolfo Méndez Mata, refiriéndose a cincuenta mil millones de colones.

¿Será que los Ministros de Gobierno se referían a cosas totalmente distintas, o que la prensa no estaba citando completamente y con fidelidad lo que se decía?. Independientemente de cuál sea el caso, es clara la necesidad de cambios de método en futuras situaciones de emergencia.

Al considerar el rango de estimados emitidos, tanto en los primeros días como meses después, la única información que parece ser realmente consistente, es aquella incluida en el documento de Robles elaborado para la Comisión Nacional de Emergencias. La información global sobre los costos de reparaciones de infraestructura incluidos en este documento, se acercan justamente a información atribuida al Banco Mundial y comentada en la edición del 27 de setiembre del periódico La República. Ambos cálculos se acercaron a los veinte mil millones de colones. El informe de Robles incluyó, además, siete mil millones de colones atribuidos a pérdidas en la producción agrícola de gran y pequeña escala.

La confusión que reinaba en cuanto a las pérdidas directas a corto y mediano plazo debido al terremoto, se incrementaron aún más cuando la provincia de Limón y el área de Turrialba sufrieron inundaciones desastrosas durante la segunda semana del mes de agosto. Las inundaciones, acentuadas por el efecto devastador del terremoto en las partes altas de las cuencas de los ríos

(deforestación, deslizamientos, etc.) y por la formación de presas en los canales, condujeron a pérdidas importantes en la producción agrícola y en viviendas. Además, tuvieron un impacto negativo en muchas de las reparaciones realizadas a caminos, puentes y sistemas de agua potable, después del terremoto.

En esta ocasión, La Nación informó, en su edición del 14 de agosto, que estimados preliminares emitidos por el Consejo de Gobierno indicaron que las pérdidas debidas a las inundaciones podrían ser mayores que las causadas por el terremoto. En vista de esto, resultó sorprendente cuando el 17 de agosto, La República informó que los equipos de evaluación del gobierno estimaron las pérdidas acumuladas debido al terremoto y a las inundaciones conjuntamente en solamente los siete mil millones de colones. La Nación, ese mismo día, publicó un artículo que habló de pérdidas estimadas en la agricultura, caminos y puentes, debido a las inundaciones, de unos 2.1 mil millones de colones. Así, si esta serie de datos fuesen correctos, el terremoto podría haber causado solamente unos 3.500 millones de colones en pérdidas.

Al final de todo, un documento de resumen elaborado por la Comisión Nacional de Emergencias, después de las inundaciones, fijó los estimados preliminares de pérdidas en infraestructura rural y producción (hasta agosto) en unos 4.3 mil millones de colones (Comisión Nacional de Emergencias, 1991). Con estos estimados oficiales en mano, la única cosa que parece clara es que el daño causado por las inundaciones no era mayor que el ocasionado por el terremoto pero, tal vez, lo era.

2.3 El Impacto Económico y las Labores de Reconstrucción

La información disponible hasta la fecha refiere, principalmente, al costo de reemplazo de infraestructura y a las pérdidas directas en producción agrícola e industrial. Sobre ello, Bernardo Méndez, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, en un documento publicado en inglés y emitido por la Comisión, indicó que:

"...el costo de reparación de doscientos millones de dólares para poder volver a las condiciones existentes anteriores al terremoto, representa cerca del 17% del presupuesto ordinario del gobierno central para 1991. También representa cerca del 4% del Producto Nacional Bruto, basado en los datos de 1990. Si tomamos en cuenta todos los desastres naturales que se han experimentado en Costa Rica a lo largo de un año, las pérdidas adicionales suman aproximadamente 6% del Producto Nacional Bruto de 1990. Para un país en vías de desarrollo, con limitados y escasos recursos, esto representa un impedimento mayor e impacto en la economía nacional" (Méndez Antillón, 1991).

Los doscientos millones de dólares a los que se refirió Méndez Antillón (lo cual es consistente con la información presentada en el documento de Robles), solamente incluye el costo de reemplazo de

infraestructura y no toma en cuenta "pérdidas industriales, agrícolas y comerciales, sufridas por individuos o corporaciones" (Méndez Antillón, Ibid.).

Pérdidas directas de corto plazo en la agricultura, hasta agosto de 1991, se estimaron en unos siete mil millones de colones en el documento de Robles. No obstante, el autor no realizó cálculos en cuanto a las pérdidas de corto y mediano plazo en la industria, comercio y servicios, sin decir en el largo plazo. Por esta razón, un cálculo total del impacto del terremoto en la economía nacional y regional se vuelve imposible sin investigaciones particulares sobre el tema. A pesar de esto, algunos aspectos quedan claros en cuanto a los sectores socialmente más afectados o vulnerables.

En primer lugar, los sectores dominantes dedicados a la agricultura semi-comercial o de subsistencia de pequeña escala, claramente sufrieron pérdidas severas de corto plazo y, debido a su base financiera limitada, enormes problemas en reestablecer su capacidad de producción a mediano plazo.

La población indígena de las montañas y valles de Talamanca, relativamente aislados durante meses, debido a la destrucción de los caminos de transporte terrestre, fueron particularmente golpeados, dada su dependencia económica a la producción de banano en pequeña escala, y a las dificultades que enfrentaron en trasladar sus productos a mercados relativamente distantes.

La producción bananera de las comunidades indígenas, con un valor estimado de 18 millones de colones por mes, fue básicamente perdida durante meses después del terremoto, afectando seriamente la economía monetaria de muchas familias. Este factor, acompañado por la erosión histórica de la autosuficiencia local en el suministro de alimentos y de productos industriales sencillos, colocó a las familias en una situación precaria. El impacto a mediano plazo en la agricultura de pequeña escala, contrasta con la recuperación, relativamente rápida, de las plantaciones bananeras comerciales de gran escala. Acceso a recursos de capital autónomos, que podrían ser dedicados a la reparación de la infraestructura de transporte y de exportación, y la prioridad dada a estos sectores por parte del gobierno, fueron factores claves en este proceso diferenciado.

Un segundo sector que fue obviamente afectado, lo constituye la industria turística, particularmente los sectores de pequeña y mediana escala dentro y fuera de la ciudad de Limón. Las comunidades pequeñas de las costas del Atlántico (Tortuguero, Cahuita, Puerto Viejo, Punta Uvita, Manzanillo) descansan en gran parte en los ingresos que produce el turismo. El levantamiento costero, el depósito en gran escala de maderas en las playas, después de las inundaciones de agosto, la dificultad de acceso por tierra durante meses y un factor inherente de temor entre

potenciales visitantes redujeron drásticamente los flujos de turistas hacia la costa Atlántica. En el mes de octubre, seis meses después del sismo, representantes de la industria turística del pueblo de Cahuita indicaron que los niveles de visitantes habían bajado a un 20% de las tasas normales.

Por último, el amplio sector de la población que sufrió daños severos o la destrucción de sus viviendas, comprenden un componente notorio de la población permanentemente afectada.

La dependencia de muchos en un proceso lento de reconstrucción de viviendas por parte del gobierno, ha dejado a una mayoría de la población sin una vivienda adecuada, a casi un año del terremoto. Otros grupos, todavía a finales de 1991, ocupaban viviendas temporales, y algunos otros grupos que si habían recibido una nueva vivienda, se quejaban de dificultades en el suministro de agua potable; de tal forma, se les dejaba con casas, pero sin agua.

La lentitud en el proceso de reconstrucción, especialmente en aspectos relacionados con las necesidades de los sectores más pobres de los centros urbanos y rurales, ha sido un tema constante de debate durante el año después del terremoto. Una vez que las dificultades iniciales encontradas en la logística de las acciones de emergencia se habían superado (la búsqueda de víctimas, distribución de comida y agua potable, etc.) y se había llegado a una finalización relativamente satisfactoria de esta etapa, los siguientes períodos de rehabilitación y reconstrucción han sido plagados con problemas relacionados con la magnitud y la complejidad de los daños infraestructurales; prioridades establecidas en la asignación de recursos; y, la lentitud en la movilización de ayuda financiera hacia la región, entre otras.

Esta situación generó numerosas protestas y mecanismos de presión, ejercidos por distintas organizaciones e individuos de base regional. Estas trascendieron la demanda para una atención ágil y más rápida a los problemas causados directamente por el "terremoto del siglo", buscando colocar el problema del abandono histórico de la región atlántica y de los problemas estructurales de desarrollo como puntos centrales del debate. Como tal, la naturaleza de los movimientos sociales que se generaron después del terremoto sufrieron una transformación cualitativa, pasando de una preocupación temprana para la resolución inmediata de problemas particulares, hacia una preocupación más amplia para el desarrollo global futuro de la región.

Una manifestación relativamente temprana de este proceso se expresó en una publicación emitida por la Comisión Popular de Emergencia de Limón, y publicada en La Nación el día 4 de mayo. Esta Comisión, formada el 28 de abril bajo los auspicios de la Federación de Trabajadores de Limón (FETRAL), agrupó a representantes de sindicatos, iglesias, organizaciones no

infraestructura y no toma en cuenta "pérdidas industriales, agrícolas y comerciales, sufridas por individuos o corporaciones" (Méndez Antillón, Ibid.).

Pérdidas directas de corto plazo en la agricultura, hasta agosto de 1991, se estimaron en unos siete mil millones de colones en el documento de Robles. No obstante, el autor no realizó cálculos en cuanto a las pérdidas de corto y mediano plazo en la industria, comercio y servicios, sin decir en el largo plazo. Por esta razón, un cálculo total del impacto del terremoto en la economía nacional y regional se vuelve imposible sin investigaciones particulares sobre el tema. A pesar de esto, algunos aspectos quedan claros en cuanto a los sectores socialmente más afectados o vulnerables.

En primer lugar, los sectores dominantes dedicados a la agricultura semi-comercial o de subsistencia de pequeña escala, claramente sufrieron pérdidas severas de corto plazo y, debido a su base financiera limitada, enormes problemas en reestablecer su capacidad de producción a mediano plazo.

La población indígena de las montañas y valles de Talamanca, relativamente aislados durante meses, debido a la destrucción de los caminos de transporte terrestre, fueron particularmente golpeados, dada su dependencia económica a la producción de banano en pequeña escala, y a las dificultades que enfrentaron en trasladar sus productos a mercados relativamente distantes.

La producción bananera de las comunidades indígenas, con un valor estimado de 18 millones de colones por mes, fue básicamente perdida durante meses después del terremoto, afectando seriamente la economía monetaria de muchas familias. Este factor, acompañado por la erosión histórica de la autosuficiencia local en el suministro de alimentos y de productos industriales sencillos, colocó a las familias en una situación precaria. El impacto a mediano plazo en la agricultura de pequeña escala, contrasta con la recuperación, relativamente rápida, de las plantaciones bananeras comerciales de gran escala. Acceso a recursos de capital autónomos, que podrían ser dedicados a la reparación de la infraestructura de transporte y de exportación, y la prioridad dada a estos sectores por parte del gobierno, fueron factores claves en este proceso diferenciado.

Un segundo sector que fue obviamente afectado, lo constituye la industria turística, particularmente los sectores de pequeña y mediana escala dentro y fuera de la ciudad de Limón. Las comunidades pequeñas de las costas del Atlántico (Tortuguero, Cahuita, Puerto Viejo, Punta Uvita, Manzanillo) descansan en gran parte en los ingresos que produce el turismo. El levantamiento costero, el depósito en gran escala de maderas en las playas, después de las inundaciones de agosto, la dificultad de acceso por tierra durante meses y un factor inherente de temor entre

potenciales visitantes redujeron drásticamente los flujos de turistas hacia la costa Atlántica. En el mes de octubre, seis meses después del sismo, representantes de la industria turística del pueblo de Cahuita indicaron que los niveles de visitantes habían bajado a un 20% de las tasas normales.

Por último, el amplio sector de la población que sufrió daños severos o la destrucción de sus viviendas, comprenden un componente notorio de la población permanentemente afectada.

La dependencia de muchos en un proceso lento de reconstrucción de viviendas por parte del gobierno, ha dejado a una mayoría de la población sin una vivienda adecuada, a casi un año del terremoto. Otros grupos, todavía a finales de 1991, ocupaban viviendas temporales, y algunos otros grupos que si habían recibido una nueva vivienda, se quejaban de dificultades en el suministro de agua potable; de tal forma, se les dejaba con casas, pero sin agua.

La lentitud en el proceso de reconstrucción, especialmente en aspectos relacionados con las necesidades de los sectores más pobres de los centros urbanos y rurales, ha sido un tema constante de debate durante el año después del terremoto. Una vez que las dificultades iniciales encontradas en la logística de las acciones de emergencia se habían superado (la búsqueda de víctimas, distribución de comida y agua potable, etc.) y se había llegado a una finalización relativamente satisfactoria de esta etapa, los siguientes períodos de rehabilitación y reconstrucción han sido plagados con problemas relacionados con la magnitud y la complejidad de los daños infraestructurales; prioridades establecidas en la asignación de recursos; y, la lentitud en la movilización de ayuda financiera hacia la región, entre otras.

Esta situación generó numerosas protestas y mecanismos de presión, ejercidos por distintas organizaciones e individuos de base regional. Estas trascendieron la demanda para una atención ágil y más rápida a los problemas causados directamente por el "terremoto del siglo", buscando colocar el problema del abandono histórico de la región atlántica y de los problemas estructurales de desarrollo como puntos centrales del debate. Como tal, la naturaleza de los movimientos sociales que se generaron después del terremoto sufrieron una transformación cualitativa, pasando de una preocupación temprana para la resolución inmediata de problemas particulares, hacia una preocupación más amplia para el desarrollo global futuro de la región.

Una manifestación relativamente temprana de este proceso se expresó en una publicación emitida por la Comisión Popular de Emergencia de Limón, y publicada en La Nación el día 4 de mayo. Esta Comisión, formada el 28 de abril bajo los auspicios de la Federación de Trabajadores de Limón (FETRAL), agrupó a representantes de sindicatos, iglesias, organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunales, municipalidades y otros

sectores organizados de la población de la ciudad de Limón, en respuesta a la necesidad sentida para una participación directa y más activa de la población en las actividades llevadas a cabo durante el periodo de emergencia.

En esta publicación, la Comisión Popular de Emergencia expresó su resolución de:

"evitar el uso discriminatorio de la solidaridad, combatir la especulación, evitar con toda energía el confundir los PROBLEMAS HISTORICOS de la provincia, con los de la emergencia y que la solución de aquellas se quede en estas".

Además, terminaron la publicación insistiendo en que:

"no será posible la reconstrucción de Limón sin la participación del pueblo alrededor de sus organizaciones sindicales, populares y religiosas".

Después de un mes de preocupaciones y protestas por parte de numerosos grupos organizados, varios Ministros del Gobierno, incluyendo a Rodolfo Méndez Mata, Ministro de la Presidencia, fueron sujetos de severas críticas en una sesión abierta de la Municipalidad de Limón celebrada el día 22 de mayo. Representantes de organizaciones populares fueron reportados haciendo amplias críticas en cuanto a los problemas persistentes, asociados con la falta de agua potable, el cierre de escuelas, la destrucción de puentes y carreteras y el mal funcionamiento de los hospitales (L.R. 23 de mayo, p.4A).

Enfrentado con estas críticas Méndez Mata indicó, de alguna forma realista, que "no es posible reconstruir en 30 días lo que se tardó años en edificar" (L.R. 23 de mayo p.4A). Algo menos realista, sin embargo, eran los comentarios reportados en la prensa hechos por Guillermo Madriz, Ministro de Obras Públicas y Transportes, en el sentido de que en el curso de los siguientes seis meses, "no quedarán ni señales del terremoto" (L.N. 22 de mayo, p.5A).

Paralelo a lo anterior, los problemas sentidos a nivel global y sectorial se vieron matizados con la idea de discriminación a nivel social. Reflejando comentarios sobre la naturaleza privilegiada de la respuesta a las necesidades de los sectores exportadores de banano, y la marginación de miles de pequeños dueños de tierras, el Obispo Alfonso Coto de Limón, arguyó a favor de la necesidad de trabajar "en función del drama humano" que se vivía en la provincia y que "el gobierno no sólo debería trabajar en función de una mayor entrada de divisas sino en apoyo de las personas quienes son fuentes productivas".

"... por encima del banano están miles de personas afectadas" (L.R. 23 de mayo, p.5A). Estos, de acuerdo con Coto, deberían de ser tratados con "la dignidad y el respeto que se merecen" (L.N. 22 de mayo, p.5A).

Las inquietudes expresadas tempranamente por muchos sectores de la región, en cuanto a su marginación de los frutos del esfuerzo de reconstrucción, emergieron nuevamente algunos meses después con la publicación de una página pagada completa en la edición del 11 de agosto de La Nación (página 25A). Sin embargo, esta vez era la Cámara Nacional de Bananeros, que estaba expresando su protesta, aparentemente no a favor de sus propios intereses, sino más bien como apoyo a los sectores populares. En una declaración emotiva, la Cámara comenzó indicando la manera en que el terremoto

"evidenció las necesidades de la provincia de Limón, tradicionalmente alejada de opciones claras de desarrollo material, moral y espiritual para sus ciudadanos. La eficiente labor del Gobierno de la República en la atención inmediata de la tragedia abrió la esperanza de que finalmente el Estado se volcaría hacia la zona Atlántica en forma definitiva. Sin embargo, a casi cuatro meses de la fecha del sismo, se puede constatar que Limón ha caído, nuevamente en el olvido".

Después de ésta afirmación de apertura, la Cámara demandó que el gobierno implementara soluciones definitivas y dignas a los problemas de "los caminos e infraestructura en pésimo estado", "grandes volúmenes de basura acumulada en la ciudad", a "los escombros sin remover", a "la falta de agua potable y construcción de los nuevos acueductos", "insuficientes servicios de salud", y en cuanto a "la ausencia de políticas concretas y de apoyo gubernamental a iniciativas propias". La publicación concluyó con una demanda "respetuosa, pero vehemente" hacia el Presidente de la República, en el sentido de establecer:

"un GRUPO DE ACCION DE ALTO NIVEL que, hombro a hombro con las instituciones y ciudadanos limonenses, ejecute las obras y los programas que requiere con urgencia la provincia, tome las medidas correctivas que atiendan adecuadamente el deseo de su desarrollo moral y espiritual de los limonenses y garantice su salud y bienestar físico".

El "enemigo" número uno de los sectores populares y de los sindicatos, ahora aparecía como su aliado principal. Sin embargo, las connotaciones políticas de esta primera publicación y una difícil "alianza de clases", oportunistamente desarrollada, emergió rápidamente cuando la Cámara publicó una segunda manifestación, de una página completa, en La Nación del día siguiente. Este artículo fue titulado "Y el tercer puesto de embarque en Moín, qué?" (L.N. 12 de agosto, p.25A).

En esta nueva publicación, la Cámara emprendió una crítica violenta contra el gobierno, por la falta de acción llevada a cabo durante los dos años previos en la construcción del tercer embarcadero de Moín, una área congestionada para la exportación de bienes. Indicó en la publicación que desde el segundo semestre de 1989 a la fecha "el sector bananero ha aportado más de \$17.5 millones para financiar la obra y aún no se ha removido un metro cúbico de material".

Las dos publicaciones hechas por la Cámara fueron seguidas rápidamente con un editorial publicado por La Nación el día 14 de agosto (p.14A). Este periódico, estrechamente ligado con los sectores agroexportadores del país, y en un momento en que la región Atlántica sufriera severas inundaciones escribió:

"Es preciso ante esta nueva y dura prueba que estoicamente soporta esta región del país, revisar la posición del Estado frente a la zona Atlántica. Si esta ha sido tan severamente castigada, ha de gozar al menos de una atención preferente del Estado y de la sociedad. No está en manos del hombre evitar los terremotos o los temporales, pero si es posible mitigar el sufrimiento de los habitantes de esta zona mediante la previsión y una actitud Estatal que contemple el desarrollo de esta región en forma global con hincapié en los aspectos prioritarios".

La Nación insistió en la necesidad de "fortalecer a la Comisión Nacional de Emergencias" y criticó la "improvisación, la inacción o ineficiencia Estatal". Además, el periódico atacó abiertamente a JAPDEVA, la agencia estatal descentralizada encargada de la promoción del desarrollo de la Costa Atlántica; y, también, a los sindicatos del sector público; la falta de atención dada a los problemas de la provincia; y, en consonancia con las publicaciones de la Cámara de Bananeros, el abandono consistente del gobierno de la infraestructura portuaria, lo cual va "en desmedro de las exportaciones y de las importaciones y en general de la economía nacional."

A través de esta serie de tres publicaciones, a la vez que se insistió en un apoyo incrementado para el desarrollo global de la provincia y para los sectores exportadores en particular, también se prestaba a una interpretación en cuanto al temor creciente del estallido de una disensión social disruptiva en una área tipificada, históricamente, por altos niveles de protesta social organizada (véase Valverde, Vargas y Lavell, 1987).

La posición estratégica de la región en términos de la exportación de productos agrícolas y en cuanto a infraestructura portuaria causó, sin duda, preocupaciones sobre el posible impacto a largo plazo de huelgas laborales y de otras formas generalizadas de presión social. De hecho, La Nación fue muy explícita en cuanto

a algunas de las formas de organización social existentes en Limón al referirse al:

"poder de los sindicatos en el sector público, en Limón, que han consumido buena parte de los recursos que deberieron haberse consagrado al bien económico y social de la provincia de Limón. ¿Cuánto dinero se ha gastado en burocracia y cuánto en el auténtico desarrollo? ¿No se han establecido polos de poder sindical que hacen y deshacen y que han causado daños ingentes a la economía nacional y, por consiguiente, a la provincia de Limón?".

Una nota conspiratoria se introdujo en el artículo de La Nación cuando afirmó que los problemas de la provincia han servido:

"no de acicate para la acción gubernamental, sino de tema predilecto para la demagogia y para la calculada explosión callejera dirigida generalmente por personas interesadas en capturar, reverdecer o conservar un liderazgo personal".

La impresión que surge después de un análisis de las tres publicaciones y considerando la particular situación social que vivía Limón, es de un temor creciente de que un período de crisis social particular (relacionado con el terremoto y las inundaciones), conjuntamente con la existencia de una crisis estructural de desarrollo histórico, podría convertirse en tierra fértil para el estallido de formas generalizadas de protesta social, guiadas por grupos de interés, motivados políticamente. El impacto global de desarrollos de este tipo, sería muy serio en términos económicos y políticos a nivel nacional.

En cuanto a las demandas explícitas hechas por La Nación y la Cámara, poco avance se ha hecho hasta la fecha en la construcción del tercer embarcadero. Sin embargo, el gobierno parece haber hecho caso del llamado de la Cámara para el establecimiento de un "Grupo de Acción de muy Alto Nivel", que se había incluido en su primera publicación. Así, poco después, se formó una Comisión Intersectorial-Gubernamental, coordinada por Enrique Montealegre, Consejero Presidencial sobre Emergencias y Desastres, para coordinar estrategias de reconstrucción y las actividades que requerían, reemplazando a la golpeada Comisión Nacional de Emergencias (véase la siguiente sección para un análisis detallado de la Comisión).

Esta Comisión Gubernamental, formada por representantes de los principales Ministerios gubernamentales y de las instituciones descentralizadas, responsables de las actividades de reconstrucción, claramente tenía sus propios problemas. Así, el día 22 de octubre, seis meses después del terremoto, y un par de meses después de la instalación de la Comisión, Enrique Montealegre fue citado por La Nación (23 de octubre, p.5A) admitiendo que cada

institución trabajaba por su cuenta y que por esa razón se hacía difícil cuantificar el progreso de los trabajos.

La opinión de importantes sectores de la población local era que, obviamente, no se había logrado mucho y, por cierto, la predicción de mayo de Guillermo Madriz, en cuanto a la total resolución de los problemas dentro de seis meses, rápidamente pasó a los anales del pensamiento ilusorio.

Las actitudes críticas de los grupos locales llegó a su expresión máxima en octubre, cuando el día 16, varios grupos organizados bloquearon el acceso a la ciudad de Limón durante seis horas, en una área cercana a la Refinería de Petróleo de RECOPE. El bloqueo fue levantado cuando el Ministro de la Presidencia, Rodolfo Méndez Mata, acordó viajar a Limón a reunirse y negociar con miembros del Concejo Municipal y líderes organizados, reunidos bajo el paraguas de la recién creada Comisión Ejecutiva del Cabildo Abierto de la Municipalidad.

Méndez Mata amonestó severamente el uso del bloqueo, atribuyendo esta acción a un "pequeño grupo de dirigentes que desatendió el sentido de la mayoría de la comunidad que prefiere el diálogo y la negociación" (L.N. 18 de octubre, p.5A). Sin embargo, la acción parece haber contado con el apoyo implícito o explícito de varios grupos de población y sectores sociales (véase L.N., 18 de octubre, p.5A y L.R., 18 de octubre, p.6A). La Nación informó que el bloqueo fue instrumentado por "vecinos y estudiantes del cantón central... y contaron con el respaldo de los trabajadores de la municipalidad local, del comercio y del sindicato de JAPDEVA". Los trabajadores municipales declararon una huelga indefinida desde el mediodía en adelante y "al menos un 90% de los establecimientos del centro de la ciudad (cerraron) desde las 10:00 a las 2:00 p.m". (L.N. 18 de octubre, p.5A)

El Dr. Erick Castro, vocero de la Comisión Ejecutiva del Cabildo Abierto, explicó las acciones en términos de la falta de apoyo económico para la región por parte del gobierno, agregando que "el bloqueo de ayer es apenas el inicio de protestas mayores" (L.N. 18 de octubre, p.5A). Además, los líderes locales criticaron a la Comisión Intersectorial Gubernamental establecida para negociar con la comunidad, porque aseguraron que "está integrada por funcionarios medios sin poder de decisión" (L.R. 18 de octubre, p.6A).

El día lunes 21 de octubre, Méndez Mata viajó a Limón junto con otros Ministros y Viceministros para negociar con los miembros de la Comisión Ejecutiva. El vocero de la Comisión, Erick Castro, indicó que las negociaciones buscaban garantizar un mayor flujo de recursos para poder combatir los problemas históricos de la provincia, los cuales fueron acentuados por el terremoto del 22 de abril (L.N. 19 de octubre; p.5A)

El ambiente, que rodeaba las negociaciones, estaba lleno de antagonismos y divisiones, tipo partido político. Así, Méndez Mata había objetado más tempranamente a los integrantes del Cabildo Abierto, quienes de acuerdo con él evidenciaron una actitud de enfrentamiento y ruptura de las conversaciones", mientras el Presidente Rafael Angel Calderón fue citado atribuyendo las protestas del 16 de octubre a "un pequeño grupo con otras intenciones" que no tuvo "apoyo del pueblo en el movimiento" (L.N. 19 de octubre, p.5A). Por otra parte, ciertos miembros del Comité Ejecutivo ya estaban bajo presión de acuerdo con sus alianzas políticas.

Las negociaciones comenzaron bajo la amenaza de que si el diálogo se rompía nuevas protestas comenzarían, incluyendo un nuevo bloqueo y una huelga general indefinida, que incluiría los trabajadores municipales y de los muelles (L.N. 21 de octubre, p.4A).

De acuerdo con la prensa local, los resultados de las negociaciones fueron constructivos y llevados a cabo en un clima franco y cordial. Se decidió un calendario de reuniones a celebrarse entre el 23 de octubre y el 14 de noviembre. Estas reuniones, dedicadas a la discusión y resolución de problemas relacionados con la salud, vivienda, infraestructura, impuestos bananeros, educación, seguridad pública y la posible privatización de RECOPE y JAPDEVA, serían atendidos por representantes gubernamentales de alto nivel, incluyendo Ministros y Presidentes Ejecutivos de las instituciones descentralizadas del gobierno y, por otra parte, miembros de la Comisión Ejecutiva del Cabildo Abierto. El fin del diálogo entre Méndez Mata y los representantes locales fue marcado por su declaración, un día después (el 22 de octubre), luego de haber atendido una reunión del Consejo de Gobierno, de que el gobierno invertiría 12.000 millones de colones en Limón (\$92 millones aproximadamente).

De acuerdo con La Nación (26 de octubre, p.8A) Méndez Mata afirmó, categóricamente, que esta inversión en la zona Atlántica sería suficiente para superar los problemas causados por el terremoto y "convertirá a la región en un lugar privilegiado".

En vista de la cantidad citada, esta última afirmación parece tan irrealista, como la afirmación de Guillermo Madriz en mayo. En sí, esta cantidad representa menos de la mitad de los \$200 millones que la Comisión Nacional de Emergencias había estimado necesario para solamente regresar la región a las mismas condiciones antes del terremoto (Méndez Antillón, 1991); y de una cuarta parte menos de lo que Méndez Mata había estimado en mayo era el costo total de las pérdidas, o sea, 50 mil millones de colones.

Controversias sobre la lentitud en canalizar los fondos de reconstrucción hacia zonas de desastre en Costa Rica, habían florecido después del impacto del Huracán Juana, en octubre 1988,

en la costa Pacífica, y después de los terremotos de 1990 en Cóbano, Puriscal y Alajuela. En el caso de Limón, similares problemas fueron claramente enfrentados.

Durante los primeros días después del terremoto de abril, el gobierno había sido muy rápido en anunciar la reasignación de algunos créditos internacionales hacia la reconstrucción y también en cuanto a la negociación de fondos frescos. Este era el caso, por ejemplo, con dos créditos con el Banco Mundial por las cantidades de 60 y 20 millones de dólares, un préstamo de 20 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo y otro por 18.8 millones del Fondo de Inversiones de Venezuela (véase L.N. 24 abril, p.4A y 5A.; L.N. 25 de abril, p.11A, L.N. 26 de abril, p.4A).

En general, el pronóstico sobre la utilización de estos fondos era que rápidamente estarían disponibles para comenzar las actividades de reconstrucción y que el Congreso Nacional aliviaría los procedimientos normales para aprobar y asignar fondos de esta naturaleza. Sin embargo esto, obviamente, no era el caso.

Los últimos días de julio, por ejemplo, el Congreso aprobó en Primer Debate, un Plan para invertir 11.950 millones de colones para financiar una serie de obras de infraestructura en Limón y para superar algunos de los problemas ocasionados por el huracán Juana en octubre de 1988; 7.500 millones de colones fueron asignados para la zona de Limón y lo demás para la zona sur de Costa Rica afectada por Juana (L.N. 31 de julio, p.6A).

Estos fondos eran los mismos fondos internacionales que se comentaron dos días después del terremoto. Y, ambos probablemente, se relacionaban con los 12 mil millones de colones prometidos por Méndez Mata el día 22 de octubre. En esta última ocasión, se afirmó que los fondos vendrían de empréstitos obtenidos del Banco Mundial (35 millones), del Banco Interamericano de Desarrollo (22 millones), del Fondo de Inversiones de Venezuela (10 millones) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (500 millones de colones).

No importa cuáles son los detalles precisos de todo el problema de financiamiento, el gobierno claramente encontró una serie de dificultades relacionados con la logística y la coordinación global del proceso de reconstrucción y desarrollo. Además, esta situación, que prevalecía al fin de año, se complicó también por los conflictos latentes o reales y las contradicciones entre las mismas organizaciones populares de Limón. La Nación, en su edición del 25 de octubre concluyó que:

"si bien en Limón todos persiguen lo mismo, mejoras para la provincia, lo cierto es que la propia actuación de los dirigentes locales podría paradójicamente, tirar por la borda lo poco que han logrado en meses, especialmente la

disposición expresada por el gobierno de emprender acciones inmediatas".

Las diferencias estratégicas entre los distintos miembros del Concejo Municipal y la Comisión Ejecutiva del Cabildo Abierto surgieron notoriamente durante octubre, todas subrayadas por diferencias políticas importantes. La actitud más conciliatoria, propuesta por miembros del partido Social Cristiano, el Concejo Municipal de Limón y por políticos independientes "no es bien vista por varios de los integrantes de la Comisión de Cabildo Abierto, quienes exigen soluciones inmediatas", escribió La Nación, el día 26 de octubre (p.8A). De acuerdo con el periódico, esta situación conducía a presiones por parte del bloque Social Cristiano, para reemplazar cinco miembros de la Comisión Ejecutiva incluyendo su Presidente, Marvin Wright (Partido Auténtico de Limón) y cuatro simpatizantes del partido Liberación Nacional, incluyendo a Erick Castro. Además, el periódico reportó que la Federación de Trabajadores de Limón estaría dispuesta a participar en el Cabildo Abierto si los cinco miembros objetados fueran removidos. De acuerdo con FETRAL, estas personas no tenían el apoyo de la comunidad y tenían "color político" definido.

Fuerzas divisorias, luchas intestinales internas y problemas de coordinación en los niveles del gobierno nacional y de la organización local, combinados con procedimientos lentos y burocráticos de asignación de recursos a nivel legislativo, parecían captar el tono de los esfuerzos de reconstrucción en Limón durante 1991. Entre tanto, la población era, en general, sumergida en niveles aún más agudos de pobreza y desempleo.

Características políticas e institucionales preexistentes, contradicciones a nivel regional y nacional y arraigados problemas históricos, claramente emergían y se consolidaban durante un momento de crisis social coyuntural suscitado por el terremoto. Para el mes de abril de 1992, de los fondos prometidos para la región, solamente se reportó la concreción de 6.000 millones por parte del gobierno, quedando todavía una brecha muy amplia entre las necesidades calculadas y la inversión real realizada.